



REPÚBLICA DE COLOMBIA

SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	Abel Antonio Álvarez García
DEMANDADOS	Conrado de Jesús Yepes Sánchez y Comercializadora de Reciclaje CY S.A.S
TIPO DE PROCESO	Ordinario
RADICADO NACIONAL	05001-31-05-007-2021-00245-01
RADICADO INTERNO	322-2021
ASUNTO	Apelación de auto que declaró no probada la excepción previa de inepta demanda
DECISIÓN	Confirma y conmina

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ABEL ANTONIO ALVAREZ GARCÍA contra CONRADO DE JESÚS YEPES SÁNCHEZ y COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE CY S.A.S., se resuelve recurso de apelación frente a la decisión adoptada por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, el 6 de junio de 2022, mediante la cual declaró no probada la excepción previa de inepta demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda¹

El señor Abel Antonio Álvarez García formuló demanda ordinaria laboral contra Conrado de Jesús Yepes Sánchez y la sociedad Comercializadora de Reciclaje C.Y. S.A.S.; del cual se interpreta que lo pretendido en síntesis, es: i) la declaratoria de existencia de una relación laboral con las demandadas, en la modalidad verbal indefinida, en el cargo de ayudante de oficios varios, entre el 5 de enero del 2005 hasta el 15 de marzo del 2019; y como consecuencia de ello, se condene a las demandadas **ii)** al pago de todas y cada una de las consecuencias jurídicas del derecho laboral, así como el saldo pendiente de pagar por conceptos de: salario, cesantías, intereses, vacaciones, primas de servicio, recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos, pago de dotación, pago parcial de la indemnización por terminación del vínculo laboral por causa imputable a la demandada, indemnización del artículo 65 del CST, indemnización por no consignación del auxilio de cesantías; **iii)** la indexación de las condenas; **iv)** aportes a la seguridad social y cotizaciones a pensión, ARL, CAJA,

¹ 01PrimeralInstancia; 03 2021-00245 ESCRITO DE DEMANDA Y ANEXOS.pdf

SENA e ICBF; **v)** pensión sanción; **vi)** retroactivo de salarios y subsidio de transporte desde el 5 de enero de 2005 y el 15 de marzo de 2019; **vii)** cálculo actuarial por cotizaciones a pensión ante Colpensiones, desde el 5 de enero de 2005 al 15 de marzo de 2019; **viii)** reconocimiento y pago de auxilio de transporte entre el 5 de enero de 2005 y el 15 de marzo de 2019; **ix)** Sanción de la Ley 361 de 1997; **x)** lo ultra y extra petita y **xi)** condena en costas y agencias en derecho.

La demanda fue admitida mediante auto del 4 de junio de 2021², ordenándose la notificación a las demandadas, quienes dentro del término legal recorrieron el traslado de la demanda oponiéndose a las pretensiones de la demanda.

i) Conrado de Jesús Yepes Sánchez³: negó la existencia de la relación laboral explicando que quien vinculó laboralmente al demandante fue el señor Virgilio de Jesús García quien tenía su puesto de reciclaje en la misma bodega del demandado, como se desprende de la carta de renuncia y el contrato de transacción obrante en el expediente.

Este codemandado formuló las siguientes excepciones previas:

- **Falta de integración del contradictorio por pasiva:** sustenta que al pretender el actor el reconocimiento y pago del cálculo actuarial por cotizaciones en pensión ante Colpensiones, siendo la única entidad competente para realizar dicho cálculo, debe ser integrada al proceso, garantizándole el ejercicio de su derecho de defensa.

- **Ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones:** en virtud de que la activa no cumple con los requisitos dispuestos por el artículo 25A del CPTSS, al acumular todas las pretensiones como principales, sin que haya lugar a ello, pues algunas de las pretensiones resultan contradictorias entre sí, pues se pretende que el demandado sea condenado varias veces por un mismo hecho, y además en la pretensión primera deprecia el reconocimiento y pago de una pensión sanción, mientras que en la quince, reiterada en la diecisiete, pretende el pago del cálculo actuarial por cotizaciones a pensiones ante Colpensiones causadas entre el 4 de enero de 2005 al 15 de marzo del 2019, las cuales son totalmente excluyentes, no pudiendo presentarse como principales, en tanto no es dable pedir una pensión sanción por omisión en las cotizaciones al sistema pensional y a la vez pretender de forma principal se realicen las respectivas cotizaciones para que se tengan en cuenta para el pago de la pensión de vejez por parte de Colpensiones.

Conforme a lo expuesto solicitó se ordene la terminación del proceso mediante auto interlocutorio en razón a la inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones.

ii) Comercializadora de Reciclaje CY S.A.S⁴: niega la existencia de la relación laboral, resaltando que la sociedad solo fue constituida en junio del año 2019, y los extremos temporales expuestos en el líbello introductor se enmarcan entre el 5 de enero de 2005

² 01PrimerInstancia; 04 2021-00245 ADMITE Y ORDENA NOTIFICACION.pdf

³ 01PrimerInstancia; 08 2021-00245-00 ESCRITO DE CONTESTACIÓN CONRADO DE JESUS YEPES SÁNCHEZ.pdf

⁴ 01PrimerInstancia; 10 2021-00245-00 ESCRITO DE CONTESTACIÓN COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE.pdf

y el 15 de marzo del 2019, fecha anterior a la constitución de la sociedad, razón por la que no hay obligaciones a reconocer por su parte.

Mediante auto del 23 de febrero de 2022 se dio por contestada la demanda por parte de ambas demandadas⁵.

Decisión objeto de recurso

El 6 de junio de 2022 en la audiencia regulada en el artículo 77 del CPTSS⁶, la A Quo dio traslado de las excepciones a la parte demandante, quien en torno al tema que nos ocupa, esto es, la excepción por ineptitud de la demanda, afirmó no asistirle razón al demandado, toda vez que las pretensiones se enunciaron debidamente, además, el juez laboral tiene capacidad de fallar extrapetita con base a lo probado, prevaleciendo el principio de realidad sobre las formas, de ahí que resulten improcedentes las excepciones formuladas como previas.

Así, tras hacer un recuento de los argumentos de los medios exceptivos formulados, la juez de instancia **declaró probada la excepción de falta integración del contradictorio por pasiva, y denegó la de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones**, esta última bajo el argumento de que en virtud de los deberes, poderes y responsabilidades del juez dentro de procesos laborales y de la seguridad social en que se discuten asuntos relevantes y de carácter fundamental, razón por la que se flexibilizan requisitos, atendiendo además al deber de interpretación y de valoración de forma integral la demanda para armonizar su contenido con la intención de la parte, y así con sus razones fácticas auscultar su causa y verdadero alcance, más allá de su redacción y literalidad, en aras de dar prevalencia al derecho al acceso de administración de justicia y el derecho sustancial sobre el formal, por lo que si bien encuentra algunas pretensiones excluyentes, tanto la ley como la jurisprudencia permiten su formulación como principal y subsidiarias.

Inconforme parcialmente con lo decidido, el apoderado de la parte demandada, formuló recurso de alzada en torno a la excepción previa no declarada, argumentando que es evidente la indebida acumulación de pretensiones, al deprecarse una pensión sanción a la vez del pago del cálculo actuarial, las cuales se dirigen a amparar el mismo riesgo de vejez del afiliado o trabajador, derivando en su exclusión, no siendo admisible que la juez de instancia sustente lo decidido en facultad de interpretar la demanda, siendo obligatorio para la activa, interponer las pretensiones de forma principal y subsidiaria como dispone el artículo 25A del CPTSS, ello con el fin de que el Despacho pueda conocer qué pretensión resuelve en primera medida y cuál en segundo orden en caso de no prosperar aquella, razones por las que pide se declare probada la excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones y que, como lo indica la Corte Suprema de Justicia en Sentencia 13145 –no refiere el año- con ponencia del Dr. Germán Valdez Sánchez, y se disponga la terminación del proceso mediante auto sin que genere cosa juzgada para el demandante.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

⁵ 01PrimerInstancia; 13 2021-00245- AUTO TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA (E1).pdf

⁶ 01PrimerInstancia; 23 2021-00245-ORDINARIO-Acta audiencia Art 77 CPTSS (OF1).pdf

Una vez concedido el traslado a las partes para alegar de conclusión en esta sede, la activa y Comercializadora de Reciclaje CY S.A.S, lo recorrieron de forma oportuna, mientras que el señor Conrado de Jesús Yepes Sánchez se abstuvo de pronunciarse.

i) La parte demandante⁷, solicitó confirmar la decisión emitida por la juez A Quo, afirmando el acierto en la aplicación del derecho sustancial por la cuerda procesal pertinente.

ii) Comercializadora de Reciclaje CY S.A.S.⁸ se aparta de lo concluido por la Juez A Quo en torno desestimar la excepción previa de inepta demanda, porque el artículo 25^a del CPTSS refiere que las pretensiones que se presenten en la demanda no pueden ser excluyente entre sí, y de ser así, deben formularse como principal y subsidiaria, ello con el fin de darle orden al proceso, respetar los derechos fundamentales de las partes procesales, fijar correctamente el objeto del litigio y practicar las pruebas pertinentes, de manera que es obligación del juez realizar la revisión formal de la demanda en caso de que no se formule el petitum de forma organizada, indicándole al demandante que debe adecuar las pretensiones excluyentes entre sí, pero de no advertir tal irregularidad en el estudio inicial, el demandante tiene la oportunidad de reformar la demanda una vez esta sea contestada y se formulen los medios exceptivos, lo que da cuenta de las múltiples oportunidades que tiene la activa de presentar las pretensiones organizada, y en caso de no ser así, el Juez tiene la facultad de interpretar cuáles deben ser resueltas de forma principal y cuales de forma subsidiaria, lo cual debe realizarse al momento de resolver las excepciones previas de forma clara, no obstante, la Juez A Quo al resolver se limitó a decir que no declaraba probada la excepción, sin realizar la debida interpretación que le obligaba, por lo que solicita se revoque parcialmente lo decidido, y en su lugar disponga la terminación del proceso declarando probada la excepción formulada.

II. CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el Art. 57 de la Ley 2^a de 1984; los Arts. 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Según el alcance de la sustentación del recurso de apelación, el problema jurídico a resolver en esta sede consiste en determinar si tiene o no vocación de prosperidad del recurso de apelación interpuesto contra el auto calendaro 6 de junio de 2022 que declaró no probada la excepción previa de inepta demanda por presentar el defecto enunciado de indebida acumulación de pretensiones.

Pues bien, para resolver se encuentra que entre los requisitos que debe reunir la demanda laboral, conforme al artículo 25 del CPTSS, cuyo numeral 6^o, prevé que debe expresarse lo pretendido con precisión y claridad, y para los eventos en que se acumulen pretensiones el aparte A de esa misma norma, establece lo siguiente:

⁷ 02SegundaInstancia; 03AlegatosDemandante.pdf y 05AlegatosDemandante.pdf

⁸ 02SegundaInstancia; 04AlegatosComercializadora.pdf

“El demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurren los siguientes requisitos:

- 1. Que el juez sea competente para conocer de todas.*
- 2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.*
- 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento.*

En la demanda sobre prestaciones periódicas, podrá pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentación de aquella y la sentencia de cada una de las instancias.

También podrá acumularse en una demanda pretensiones de varios demandantes contra el mismo o varios demandados cuando provengan de igual causa, o versen sobre el mismo objeto, o deban servirse de las mismas pruebas, aunque sea diferente el interés jurídico.

En las demandas ejecutivas podrán acumularse las pretensiones de varias personas que persigan, total o parcialmente, unos mismos bienes del demandado. Cuando se presente una indebida acumulación que no cumpla con los requisitos previstos en los incisos anteriores, pero sí con los tres numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto cuando no se proponga oportunamente la respectiva excepción previa.

Dicho articulado, debe leerse en concordancia con los artículos 100 y 101 del CGP, aplicable por analogía al procedimiento laboral, que establece como una excepción previa, la inepta demanda por falta de requisitos formales, haciendo referencia a aquellas demandas en que no se observaron los presupuestos necesarios para su elaboración.

En torno a este tópico, es relevante referirnos al principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades del proceso, contemplado en el artículo 228 de la Constitución Política, así:

*“ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y **en ellas prevalecerá el derecho sustancial**. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” (Negrilla propia).*

Dicho principio se encuentra desarrollado además, en el artículo 11 del CGP, en el cual se consagra para el Juez una regla hermenéutica al momento de interpretar las normas de carácter procesal, la cual consiste, en que *“...deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial...”*, de ahí que deba entenderse el proceso como el medio de que disponen las partes para reclamar y debatir en presencia del Estado, los derechos que crean tener.

Así lo ha indicado en múltiples ocasiones la H. Corte Constitucional, al recordad que *“Los jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material. Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228)⁹.”*

En esa vía, la H. Corte Suprema de Justicia respecto a la excepción previa de indebida acumulación de pretensiones, ha enfatizado en el deber del juez laboral de intervenir, cuando le sean elevadas pretensiones excluyentes entre sí, con miras a materializar los principios del debido proceso y evitar una sentencia inhibitoria, de conformidad con las facultades y deberes de interpretación con que cuenta, para armonizar los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, con el derecho pretendido por la parte que activa el aparato judicial, ello, por cuanto no es dable confundir el respeto de las formas procesales con un desproporcionado formalismo que, en ocasiones se califica como una vía de hecho por exceso ritual manifiesto, así lo expuso entre otras, en la **sentencia SL 9318 de 2016**, al advertir que:

“(…) el juez laboral está llamado a acatar sin perder de vista la trascendencia social de sus sentencias, ni soslayar tampoco el principio constitucional consignado en el canon 228 de la Carta, según el cual, las formalidades no pueden prevalecer sobre el derecho sustancial», para lo cual es su deber indagar el querer de las partes y, de ser necesario, interpretar las piezas procesales para resolver el litigio que allí se plantea.”

Si bien en aplicación del debido proceso, las sentencias deban enmarcarse dentro de las pretensiones de la demanda, lo cierto es que, dado el carácter fundamental que ostentan los derechos reclamados en la jurisdicción laboral, el juez no solo tiene la facultad, si no el deber de interpretar la demanda, con el fin de auscultar y obtener la verdadera naturaleza e intención jurídica y así garantizar una tutela judicial efectiva en concreción del derecho al acceso a la administración de justicia.

De tal manera, al juez laboral le compete¹⁰ dirimir el problema que surge de la indebida acumulación de pretensiones, con el fin de evitar que no se materialicen los derechos sustanciales que se quieren proteger cuando se accede al servicio de la justicia, así lo refirió el órgano de cierre en la materia:

“Es verdad que tanto en el artículo 25, como en el 25 A del C.P.T. y S.S se regula lo relativo a la demanda y allí se indica que corresponde referir el cimiento jurídico, los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones, que deben ser “expresad [as] con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado”, y en lo relacionado con su acumulación se fijan como reglas principales que exista competencia del juzgador para resolverlas, que no sean

⁹ T-1306-2001

¹⁰ SL 580 de 2013, citada en SL 9318 de 2016 y SL 3352 de 2019

*excluyentes “salvo que se propongan como principales y subsidiarias” y que puedan tramitarse por el mismo procedimiento; **todo ello debe verlo el juez en su contexto, y no de manera desconectada, a efectos de poder desentrañar, ante la eventual vaguedad, el querer del demandante, con el fin de evitar una nulidad o, como en este caso, una decisión meramente formal con grave detrimento de las partes, como ya se dijo.***

*De ese modo **corresponde al juzgador, a través de la lógica jurídica, determinar el sentido de las aspiraciones, y advertir, bajo ese norte, que aunque pueda existir contradicción en lo pedido, alguna de las pretensiones debe ser la válida, ya sea porque existió mayor énfasis en su argumentación, o porque la ubicación del texto permite argüir que se planteó como principal, o subsidiaria, aunque no lo haya puesto en un acápite específico, siendo el último camino, como ya se ha insistido, el de la inhibición.***

Todo lo advertido tiene una mayor significación en los juicios del trabajo, en tanto deben servir para “lograr la justicia en las relaciones que surgen entre {empleadores} y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social” (artículo 1° C.S.T.) y su materia goza de protección preeminente del Estado al punto que “Los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones” (artículo 9° C.S.T.); ello traduce en que los jueces están convocados a materializar tales aspiraciones, a través de una sentencia definitiva. (Negritas y subrayas propias)

Se concluye entonces que, las exigencias contenidas en el CPTSS respecto de las pretensiones y hechos (art. 25, numerales 6, 7 y 8), no pueden mirarse, ni examinarse con desmedido rigor, pues si de la demanda, integralmente considerada, se puede deducir cuál es en concreto la aspiración del demandante, deberá el juzgador, en uso de los amplios y extendidos poderes que –como director del proceso la ley procesal le confiere –, interpretar racionalmente la demanda para desentrañar la pretensión, o para precisarla.

Caso concreto

Se tiene que la activa al formular las pretensiones de la demanda incurrió en el defecto que se le imputa, pues deprecó el reconocimiento y pago de la pensión sanción (pretensión 1) y a su vez el reconocimiento y pago del cálculo actuarial por la omisión del empleador en el pago de las cotizaciones en pensión, (pretensiones 15 y 17), las cuales resultan excluyentes entre sí, toda vez que en su esencia ambas se dirigen a amparar el riesgo de vejez, la primera a cargo del empleador omiso en la afiliación al sistema general de pensiones, y la segunda a cargo de la administradora de pensiones, como consecuencia del pago del cálculo actuarial correspondiente al periodo en que no se realizó el pago de las cotizaciones por dicho riesgo¹¹.

De lo anterior, no se percató la Juez de instancia al hacer el estudio de admisibilidad de la demanda, ocupándose de ello la parte demandada formulando el respectivo medio exceptivo al contestar el libelo introductor, sin que la parte demandante al correrle traslado sobre tal excepción en la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS, hiciera la adecuación pertinente, por el contrario, insistió en la enunciación correcta de lo pretendido; de ahí que en principio tuviera vocación de prosperidad la excepción previa formulada de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, sin

¹¹ 01PrimeralInstancia; 03 2021-00245 ESCRITO DE DEMANDA Y ANEXOS.pdf

embargo, acogiendo lo interpretado jurisprudencialmente por el órgano de cierre acorde a lo estudiado en acápite anterior, así como a los deberes y facultades otorgadas al juez laboral, acertó la funcionaria en declararla improbadamente, ello, como ya se ha señalado, porque corresponde al juez corregir las irregularidades advertidas, que en el sublite consiste en interpretar la demanda y pretensiones, para desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante, al formular sus súplicas, teniendo presente todo el conjunto de ese libelo, sin que pueda aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una afortunada integración.

Pese a lo anterior, no era suficiente que la juez de instancia advirtiera la existencia de deberes de interpretación, pues en dicho momento procesal, le correspondía desentrañar la verdadera intención del demandante, y determinar cuál es la pretensión principal, y cuál es la subsidiaria, ello, tal y como dejó sentado la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia **SL 5352 de 2019**, cuando cita la **SL 580 de 2013**, al advertir que:

“Lo anterior implica que, para evitar cualquier ruptura de tal talante, corresponde a los juzgadores de instancia, ante lo oscuro o impreciso, interpretar la demanda a través de los distintos métodos posibles, para determinar cuál es el verdadero querer de las partes, la auténtica intención de quien la presentó.

No puede perderse de vista que tal instrumento de acceso a la justicia tiene una connotación de esencialidad, pues es por su conducto que quienes comparecen a la jurisdicción exteriorizan su propósito y corresponde al Juez encontrar si existe razón en lo pedido, una vez se ha surtido todo el debate para tal efecto y ha escuchado a su contradictor.

(...)

*De ese modo **corresponde al juzgador**, a través de la lógica jurídica, determinar el sentido de las aspiraciones, y advertir, bajo ese norte, que aunque pueda existir contradicción en lo pedido, alguna de las pretensiones debe ser la válida, ya sea porque existió mayor énfasis en su argumentación, o porque la ubicación del texto permite argüir que se planteó como principal, o subsidiaria, aunque no lo haya puesto en un acápite específico (...)* (negrillas propias)

Así las cosas, no se acogerá lo apelado por el recurrente, pues se precisa que el objeto de los procesos es garantizar los derechos consagrados en las normas sustantivas, las cuales no se deben interpretar de manera aislada, ni rigorista, al extremo de constituir barreras infranqueables para acceder a una justicia pronta y oportuna, razón por la cual se **CONFIRMARÁ** la providencia recurrida, pero **CONMINANDO** a la señora Juez de Instancia que reanude la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS, y antes de continuar con la etapa de saneamiento, determine entre las pretensiones excluyentes, cuál es la pretensión principal y cuál es la subsidiaria.

III. COSTAS

Costas en esta instancia a cargo del demandado Conrado de Jesús Yepes Sánchez al salir vencido en el recurso. Agencias en derecho en la suma de \$100.000.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por la Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso de fecha y naturaleza conocidas, **CONMINANDO** a la Juez de Instancia para que reanude la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS, y previo a continuar con la etapa de saneamiento, determine entre las pretensiones excluyentes, cuál es la pretensión principal y cuál es la subsidiaria, de conformidad con las razones expuestas, siguiendo los parámetros fijados por el órgano de cierre en la jurisdicción del trabajo y seguridad social.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo del demandado Conrado de Jesús Yepes Sánchez al salir vencido en el recurso. Agencias en derecho en la suma de \$100.000.

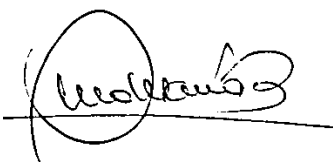
Devuélvase el expediente al Juzgado de procedencia para que continúe el trámite del proceso.

Se ordena notificar por estados.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que el auto anterior fue notificado por ESTADOS N° 009 fijados hoy 23 enero de 2023 a las 8:00AM

El secretario